

La Comuna

Revista teórica y política del PRT
Partido Revolucionario de los Trabajadores



Nº 127 ★ Diciembre de 2023
Precio de Tapa: \$ 600



**40 AÑOS DE DEMOCRACIA
BURGUESA EN ARGENTINA**

Editorial

Los defensores de esta democracia formal e hipócrita (en realidad, dictadura del capital) nada dicen sobre lo que está en juego: los intereses antagónicos irreconciliables entre el capital en pocas manos y la apropiación diaria del trabajo ajeno (ejercida por la burguesía y sus instituciones), contra el trabajo propio y las aspiraciones a una mejor vida y futuro para nuestro pueblo, ejercida por los trabajadores y pueblo en general.

Los monopolios que ordenaron allá por 1976 el golpe de Estado son los que siguen tomando las principales decisiones políticas y económicas en nuestro país, condenando al oprobio la vida de millones.

En estos 40 años pasaron diversos gobiernos y "los resultados" están a la vista: creció la pobreza, nuestros salarios por el piso, nuestros derechos pisoteados, la vida ha empeorado. Entregaron nuestras riquezas, envenenado la tierra, el aire, el agua... A todo esto, le llaman democracia.

Nos quieren hacer creer que "decidimos" cada 4 años. "Decidimos" el gobierno que va a entregar el país y nuestros derechos.

Por eso, la verdadera disputa es entre la democracia falsa que festejan en su cumpleaños 40 (y que pretenden eternizar como prenda de dominación), y la democracia directa que nació al calor de las luchas y se ejerce en las calles, los centros de trabajo y los barrios que levantan la bandera de una vida digna.

Esa democracia obrera que se viene abriendo camino en la resistencia, al tiempo que expone a los defensores de la democracia burguesa que se aferran a sostenerla por su interés de clase, con el concurso comedido del reformismo y el progresismo, que de progreso no tiene nada pues es reaccionario.

Esos que pretenden siempre ponerse del lado del sicario más "suave" obstaculizando a quienes estamos decididos a hacer todo lo posible para profundizar las contradicciones del sistema con la lucha revolucionaria liderada por la clase obrera y su partido.

Será cuestión -entonces- de ver a la revolución como la verdadera salida a la crisis, como una necesidad real a los problemas estructurales de este sistema podrido.

Sólo conquistando nuestra dignidad desde el protagonismo de las mayorías hoy sufrientes, tendremos una verdadera democracia y no esta burla burguesa que no es otra cosa que más engaño. ★



La Comuna

Revista teórica y política del PRT

Partido Revolucionario de los Trabajadores

Publicación cuatrimestral. Año XXII

www.prtarg.com.ar



40 AÑOS DE DEMOCRACIA BURGUESA EN ARGENTINA

Hace algún tiempo (y sobre todo al acercarse el mes de diciembre) el tan promocionado aniversario de “los 40 años de democracia” pone sobre la mesa un tema que consideramos de vital importancia para entender la lucha de clases en nuestro país y para el desarrollo del proceso revolucionario: ¿De qué democracia estamos hablando?

En este trabajo histórico, político y teórico que presentamos en nuestra revista, hacemos un recorrido desde 1976 a nuestros días, abordando -lo que entendemos- son los principales elementos de todo este proceso, con el objetivo de demostrar por qué detrás de “la democracia” que la burguesía festeja se esconde el verdadero carácter de su dominación de clase.

A partir del año 1930 la alternancia entre democracia burguesa y dictaduras militares fue una constante en la historia política argentina. De hecho, el período más largo de democracia registrado hasta 1983 fue el de los dos primeros gobiernos peronistas entre 1946 y 1955.

Precisamente, la caída del primer peronismo se da en el medio de un proceso muy agudo de contradicciones y crisis en las alturas, marcado por una puja interburguesa producto de la transición del capitalismo de Estado al capitalismo monopolista de Estado, lo que derivaría en una inestabilidad política permanente. No es objeto de este artículo detenernos en un análisis a fondo de ese período. Sí, considerar ese marco de disputas como telón de fondo del golpe militar ejecutado en 1976 y, a partir de allí, la salida democrática que da inicio al período que nos interesa abordar: **el de los últimos 40 años de vigencia de la democracia de la burguesía.**

Nos proponemos realizar un breve “raconto” histórico de esa etapa con el fin de de-sentrañar el verdadero carácter de la dominación de

la burguesía en estas últimas cuatro décadas, la experiencia del movimiento de masas y las características particulares que el régimen burgués ha adoptado producto de los cambios económicos, políticos y sociales que fueron determinando la actual situación.

Asimismo, argumentar una vez más por qué un proyecto de lucha por el poder debe entender la esencia de dicho régimen con el objetivo de determinar **su carácter clasista y la necesidad de enfrentarlo.**



Uriburu - Golpe de Estado 1930

Se podría decir que el golpe militar ejecutado el 24 de marzo de 1976 es la consagración del triunfo de los sectores más concentrados de la burguesía monopolista (u oligarquía financiera) sobre los restos de una burguesía nacional que, para esas épocas y como diría el Che, ya no contaba con un proyecto propio.

En ese marco, la oligarquía financiera, valiéndose de la dictadura, transfirió la deuda privada a deuda pública más otros endeudamientos (vía préstamos) financieros del Estado con el capital transnacional, a partir de lo cual el mecanismo de la deuda constituyó una herramienta muy útil de transferencia de capitales hacia la oligarquía financiera transnacional.

La deuda se elevó de US\$ 8.000.000.000 a US\$ 40.000.000,000 y de ahí en más esa transferencia fue parte de la vida de nuestro país (cosa que también ocurrió en el resto del mundo). En aquellos años, quien gestionó la transferencia de deuda privada a pública fue Domingo Cavallo, mediante los seguros de cambio.

Los monopolios más fuertes y entrelazados con el capital trasnacional desplazaron a aquellos restos de burguesía nacional. De hecho, los sectores burgueses de origen nacional sobrevivientes en ese período son los que pudieron engancharse en la ola monopolista estatal. Nos referimos, por ejemplo, a conglomerados como el Grupo Rocca, fundadores de Techint, que logró convertirse en una trasnacional que tiene una injerencia central hasta nuestros días; o a Acindar (proceso en el que participó activamente Martínez de Hoz).

El objetivo de la dictadura era realizar un drástico cambio de la

estructura productiva del país que materializara el dominio de los sectores triunfantes, utilizando al Estado y todos sus resortes institucionales en beneficio de esa facción del capital.

Ese objetivo incluía la necesidad de implantar el fascismo como herramienta disciplinante de la propia clase burguesa (de las facciones derrotadas de la burguesía) y, fundamentalmente, de la clase obrera y demás sectores explotados y oprimidos.

Para ello fue implementado el plan sistemático de represión y desaparición forzada que persiguió la derrota de las organizaciones revolucionarias y del movimiento de masas.

Nuestro Partido siempre ha sostenido y sostiene que ese plan pudo lograr la derrota de las organizaciones políticas y armadas, pero no así de las masas. Mucho menos de la clase obrera. Efectivamente, la resistencia clandestina de la clase de vanguardia que, a pesar de la muerte, desaparición, cárcel y exilio de sus dirigentes sindicales y políticos, hizo valer su experiencia de lucha y organización forjada, principalmente en las décadas del 60 y 70, fue determinante para que la dictadura no pudiera lograr estabilidad política y económica, lo que desembocó en su retirada del poder en 1983.

La clase obrera fue determinante en la derrota de la dictadura. Porque la resistencia obrera, aun en las condiciones de represión más agudas, no permitió uno de los objetivos centrales de la burguesía monopolista: el disciplinamiento de la clase productora como condición para poder ejecutar a fondo sus planes de reforma estructural.

Tal resistencia contagió a otros sectores del pueblo, por ejemplo, el movimiento de DDHH, que fue tomando fuerza y masividad a partir de importantes movilizaciones obreras y populares. Se puede mencionar la masiva movilización del 30 de marzo de 1982, así como las mo-



30 de marzo de 1982

vilizaciones de estatales durante los meses de enero y febrero de ese mismo año, entre otras.

Esta primera conclusión es fundamental para poder entender el derrotero de la lucha de clases a partir de la caída de la dictadura. A diferencia de otras experiencias de la región, los militares no se fueron cuando quisieron ni de la forma más ordenada, sino que debieron someterse ante las condiciones imperantes.

Tal era la crisis política que la propia aventura de la guerra de Malvinas fue el último maotazo de ahogado de un gobierno y unas FFAA totalmente desprestigiadas que intentaron semejante despropósito en la búsqueda de una supervivencia inútil. La derrota de esa absurda guerra (en la que murieron, como siempre, los hijos e hijas del pueblo) fue el acta de defunción de aquel gobierno.

LA DÉCADA DEL 80

El 10 de diciembre de 1983 asume la presidencia Raúl Alfonsín. Las aspiraciones democráticas se expresaban en un estado de movilización de masas importantísimo. Sólo mencionar que los cierres de campaña de los dos principales partidos con chances de triunfo electoral, la UCR y el PJ, contaron con millones de personas cada uno, nos da la magnitud de tales aspiraciones y movilización populares.

En ese marco es que se desbaratan los intentos de impunidad de la dictadura en fuga, llevándose adelante el juicio y la condena a las juntas militares responsables de la represión dictatorial. El gobierno de Alfonsín se vio obligado a impulsar y realizar los juicios, aun en medio de una actitud al principio negociadora con los militares. Las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final que fueron votadas en junio y diciembre de 1986 (por las que se limitaba el juicio y la condena a las cúpulas de las tres fuerzas) no empaña el monumental logro del pueblo movilizado. Los juicios fueron y son ejemplo en el mundo. Y sólo fueron posibles porque la dictadura fue derrotada por la movilización masiva del pueblo.

Como lo dijimos, el objetivo de realizar un profundo cambio en la estructura productiva del país por parte de la dictadura militar sólo fue conseguido a medias. Ello determinó que las condiciones económicas con las que debió

governar Alfonsín estuvieran condicionadas por la puja interburguesa y la lucha de clases. Diferentes planes de estabilización de la economía (Plan Austral, Plan Primavera) fracasaron ante la lucha de la clase obrera y otros sectores populares.

En abril de 1985, el gobierno nacional convocó una movilización en la Plaza de Mayo que fue multitudinaria. Ante el escenario de inestabilidad económica, la convocatoria fue entendida por un amplio sector de la sociedad como una manifestación de la fuerza popular. Sin embargo, el discurso de Alfonsín desde el balcón de la Casa Rosada fue para anunciar que comenzaría un período de “economía de guerra”, materializando la decisión del gobierno burgués de adoptar políticas de mayor ajuste con la implementación de los planes mencionados más arriba. Esto produjo uno de los primeros desencantos (sino el primero) con el gobierno nacional que había prometido que “con la democracia se come, se cura y se educa”, consigna que con los años se ratificó que nunca fue alcanzada.

La clase de vanguardia continuó una dinámica de luchas cuya principal característica era la organización y participación de las bases obreras, las que muchas veces rebasaban a las estructuras sindicales. Se venía de una lucha anti dictatorial que había fogueado a nuevas camadas de dirigentes obreros.

El punto culminante de ese período de luchas lo marcó la huelga y ocupación de la planta de Ford en General Pacheco, provincia de Buenos Aires, entre finales de junio y mediados de julio de 1985. Una ocupación que duró 18 días, sostenida por una organización



Huelga en la Ford - 1985

6 y participación activas de las bases obreras, con ejercicio asambleario e involucramiento de las familias y organizaciones del pueblo.

Tan culminante y determinante fue esa experiencia que la burguesía lo entendió de la misma manera, poniendo todo su andamiaje político e institucional (sindicato, justicia, fuerzas represivas) para derrotar la huelga, cometido que logró con la intervención de 2.500 efectivos armados, 200 patrulleros, carros de asalto, camiones grúas para levantar las alambradas, tres helicópteros de combate con potentes reflectores, policía motorizada y montada, perros y tanquetas. Se ratificaba así el contenido real de la frase presidencial de *economía de guerra*.

El embate burgués incluyó la utilización del discurso "democrático" que se oponía a las metodologías obreras de lucha para enmarcarlas en la nueva institucionalidad de la democracia representativa, apuntando a socavar todo intento de auto organización de las bases obreras para que las mismas se subordinaran a las estructuras sindicales pro patronales, muchas de las cuales habían sido cómplices de la dictadura.

A partir de allí las expresiones de lucha de la clase de vanguardia y otros sectores asalariados fueron mayoritariamente llevadas adelante a través de los sindicatos y de la CGT (Confederación General del Trabajo) comandada por Saúl Ubaldini. Esa central fue la que comenzó a hegemonizar los reclamos en abierta confrontación con el gobierno alfonsinista. Al principio, llevando adelante medidas de lucha que tuvieron amplia adhesión pero que se fue socavando en la medida que tal estructura fue develándose como una herramienta partidaria del PJ para debilitar al gobierno radical y jugar abiertamente en la estrategia electoral del peronismo.

En simultáneo con ese papel que jugaba la CGT los gremios de servicios ligados al Estado, como la educación, comenzaron a tener un mayor dinamismo. La "Marcha Blanca" docente que se llevó adelante en 1988, y que congregó en Buenos Aires a las columnas que partieron de diferentes provincias del país, mostró a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la educación exigiendo aumentos salariales y reivindicando la educación

de gestión estatal, con una amplia adhesión de la sociedad.

Ese estado de movilización se desarrollaba en el medio de la crisis económica, con una inflación que no podía ser controlada por el gobierno radical. Pero también se expresaba en movilizaciones de tinte definitivamente político, como la de Semana Santa de 1987. Ante el alzamiento de un sector del ejército, encabezado por Aldo Rico, demandando la supresión de los juicios a los mandos inferiores de la fuerza, una monumental movilización de masas se desplegó en todo el país en defensa de las conquistas democráticas. Si bien ese levantamiento no tenía el objetivo de llevar adelante un golpe de Estado, las masas populares, con la memoria reciente de la salida de la dictadura, salieron de a millones a las calles para frenar cualquier intento de avance militar sobre las libertades políticas conquistadas. Fueron cuatro días de movilización permanente que concluyeron con la negociación pactada entre Alfonsín y los militares alzados, en las que se les garantizaba la impunidad que reclamaban.

Esos resultados, luego de tan extraordinaria experiencia de movilización popular, significaron una frustración para amplios sectores de la sociedad argentina. Podría decirse que a partir de allí el gobierno alfonsinista perdió el amplio consenso popular con el que había comenzado, dando paso a la futura vuelta del peronismo.

El final del gobierno radical fue caótico. Una hiperinflación de más del 3.000% anual determinaba que la situación económica y política adquiriera niveles de crisis inéditas. Saqueos en supermercados y otros comercios, reclamos salariales, pujas interburguesas exacerbadas, mostraban a un gobierno que había perdido todo tipo de iniciativa. Tal situación fue coronada por el intento de copamiento al Regimiento militar de La Tablada, en la provincia de Buenos Aires, por parte de un grupo de militantes del Movimiento Todos por la Patria, comandado por Enrique Gorriarán Merlo. Un episodio en el que se mezclaron operaciones de inteligencia llevadas a cabo por el propio gobierno junto con la trasnochada convicción de ese grupo de que, a partir del copamiento denunciando un golpe de Estado, las masas saldrían a la calle a defender la democracia.

El resultado fue el aplastamiento y la represión feroces contra los participantes del hecho, con fusilamientos de gente que se había rendido y desapariciones que nunca fueron esclarecidas. El Estado burgués actuó como lo que es, reprimiendo sin contemplación, mostrando su verdadero carácter de clase y, en este caso, con la “ley en la mano”, aunque en el combate no se haya respetado ley alguna. La institucionalidad burguesa en toda su magnitud.

Como resultado de toda esta situación de crisis política y económica, Alfonsín debió adelantar el traspaso del gobierno al peronismo que había resultado ganador de las elecciones y consagrado a Carlos Menem como presidente.

LA DÉCADA DEL 90

Con las consignas de “Salarioazo” y “Revolución Productiva”, el peronismo llegó al gobierno. La campaña electoral de Menem fue creciendo en intensidad y masividad. La enorme expectativa popular que existía ante el fracaso de Alfonsín y la posibilidad de un gobierno que atendiera las demandas obreras y populares se manifestaba en espontáneas demostraciones de masas allí donde el candidato se presentaba. Multitudinarias caravanas que recorrían distintas ciudades del país y que duraban largas horas, expresaban la magnitud de la expectativa y la esperanza del movimiento de masas ante el recambio de gobierno. Podemos afirmar que en el futuro tales demostraciones ya no se repitieron, marcando la creciente decepción popular ante los procesos electorales.

Menem asume en medio de la hiperinflación y con una puja de intereses burgueses monopolistas que venían sin resolverse del gobierno anterior.

Tal puja se manifestó desde un principio con la adopción del “Plan Bunge y Born”. Dicho plan había sido elaborado en las usinas de ese conglomerado alimenticio de origen nacional, con diversificación en otras ramas productivas y comerciales, al punto de imponer a sus principales hombres en el Ministerio de Economía. Primero Miguel Roig (fallecido a pocos días de asumir) y luego Néstor Rapanelli, impulsaron el control de precios, el cierre de importaciones y la negociación paritaria entre sindicatos y empresas.

Los cuadros de los monopolios directamente en los distintos estamentos de los gobiernos pasarían a ser una constante, materializando el dominio monopolista sobre el Estado y la reconfiguración del mismo como instrumento de la clase burguesa en su conjunto para convertirse en instrumento de facciones de esa clase, acorde a los cambios que ya se habían producido en el proceso monopolista del capitalismo a nivel mundial.

Al mismo tiempo, el nuevo gobierno impulsó las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica, por las que se le otorgaban al Estado facultades extraordinarias para intervenir en la economía y se impulsaba la privatización de las empresas públicas. El discurso del nuevo presidente mutó de las consignas iniciales a las premisas del llamado “Consenso de Washington”, por lo que se adoptaban medidas de ajuste y de liberalización económica al ritmo que marcaba la hegemonía imperialista de los EEUU en el mundo, luego de la caída de la URSS.

El plan de privatizaciones fue –por un lado– una forma de “sanear” deuda y de esa manera satisfacer las demandas de los acreedores financieros, y por el otro, de otorgarle grandes negocios a los grupos económicos acomodados en el poder del Estado.

El mencionado plan fracasó en su intento de estabilizar la economía. En el medio de otra hiperinflación asume un ignoto ministro llamado Éрман González, amigo personal de Menem. En su gestión se llevó adelante el llamado “Plan Bonex”, por el que se impuso un canje compulsivo de los plazos fijos por un bono. Dicha medida significó una confiscación lisa y llana de los pequeños, medianos y a hasta grandes ahorristas favoreciendo la concentración y centralización del capital.



Menem y Cavallo - 1991

8 Una medida a todas luces destinada a privilegiar los intereses del capital monopolista que, a medida que el gobierno ejecutaba sus planes, iba también configurando lo que sería una reconversión profunda de la estructura productiva, con las consecuencias políticas, económicas y sociales que más adelante desarrollaremos.

Luego del “trabajo sucio” llevado a cabo por Éрман González, en 1991 desembarca como ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, que hasta ese momento era el canciller del gobierno menemista. Hombre de la Fundación Mediterránea, que había sido presidente del Banco Central durante la dictadura, desde donde –como ya dijimos- estatizó la deuda de las empresas privadas (otra muestra de los monopolios al mando de sensibles resortes del Estado), su misión fue ponerle el broche a un plan de estabilización económica mediante el cual se agudizó la transferencia de riqueza social a manos de un puñado de monopolios.

El llamado Plan de Convertibilidad disponía que cada 10.000 Australes (nombre de la moneda nacional de la época) se podía adquirir 1 dólar. Esa conversión de 10.000 a uno significó una monumental devaluación de los salarios y las jubilaciones. A partir de 1992 entra en vigencia el Peso, nueva denominación de la moneda, por lo que cada uno de los mismos “equivalía” a 1 dólar. Un costo altísimo que debió pagar la población asalariada para que los monopolios y su gobierno pudieran domar a la inflación e iniciar una nueva etapa de concentración capitalista en la Argentina.

Estas medidas fueron posibles dada la importante centralización política que la burguesía logró materializar, junto con el consenso de amplios sectores de masas agobiados por años de una inflación descontrolada.

Dicha centralización política, luego de las turbulencias iniciales de su gobierno, Menem la ejecutó tanto hacia adentro de la clase dominante como contra la clase revolucionaria. En ese sentido, las condiciones internacionales de la lucha de clases fueron un factor determinante para posibilitar el objetivo del disciplinamiento de la clase obrera que la dictadura no había conseguido. Ese fin nunca había sido desechado por la burguesía en el poder. Lo que había cambiado era la posibilidad política de llevarlo a cabo.

Durante la década del 80, con la hegemonía de la alianza Reagan-Thatcher a nivel mundial luego de la caída del campo socialista, el capitalismo adoptó un recambio significativo de capital constante en los procesos productivos en detrimento del capital variable, es decir la fuerza de trabajo, empujado por la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la producción.

Ese proceso se materializa en nuestro país en la década del 90, en medio de una ofensiva política e ideológica planetaria de la burguesía monopolista contra su enemigo fundamental. La imposición de la llamada globalización, con la incorporación de más de 1.400 millones de personas como mano de obra barata, determinó el retroceso a nivel mundial de la clase obrera. Una derrota que duró varias décadas.

Ese contexto permitió al gobierno menemista replicar el ataque político e ideológico contra la clase de vanguardia. Así lo entendió Menem impulsando la división por arriba y por abajo de las organizaciones sindicales, en medio de una desocupación creciente producto de los despidos en las empresas privatizadas y en el ámbito privado, donde las nuevas tecnologías hicieron posible el reemplazo de la mano de obra. En lo ideológico, el fin de las ideologías, la “muerte” de la clase obrera como clase revolucionaria en el capitalismo, la defección de los partidos llamados comunistas, etc., hicieron el resto.

El reflujo que significó la derrota de la clase obrera en ese período fue acompañado por el alza de las luchas de los sectores estatales, como salud y educación, en un marco de retroceso general de conquistas.

Sin embargo, hacia mediados de la década del 90 hacen su aparición masivas experiencias de nuevo tipo, caracterizadas por una ruptura orgánica con las organizaciones tradicionales de la democracia burguesa. Nos referimos al surgimiento de la autoconvocatoria, que venía a poner sobre el escenario las consecuencias de las políticas que se estaban implementando.

Santiago del Estero, Cutral-Có, Plaza Huincul, General Mosconi, Tartagal (entre otras tantas manifestaciones), fueron escenarios de explosiones de masas llevadas adelante por los sectores desplazados de la producción y los servicios.



Cutral C6 - 1996

Los piquetes en las rutas, los enfrentamientos con la Gendarmería, fueron amasando una resistencia creciente contra el gobierno de los monopolios que, de a poco, iba perdiendo la consideración de la sociedad con la que había iniciado su mandato. Es justo también mencionar las movilizaciones semanales de las organizaciones de jubilados y jubiladas ante el Congreso Nacional, movilizaciones que fueron ejemplares por su persistencia y combatividad y que significaron un elemento de desgaste político para el gobierno.

Sin embargo, esas expresiones de lucha no tuvieron un correlato político orgánico. Si bien la propia existencia de la autoconvocatoria denunciaba ya una crisis de la representatividad esgrimida por las concepciones democráticas burguesas, la lucha política seguía siendo un terreno en el que los monopolios mantenían una dominación férrea, más allá de las crisis políticas recurrentes que se seguían manifestando. El pueblo estaba experimentando el carácter de la democracia burguesa.

En ello tuvo enorme influencia el retroceso objetivo de la clase obrera que (más allá de las experiencias de Cutral Co, Plaza Huincul y Mosconi) estuvo ausente en esas grandes manifestaciones producto de la derrota que había sufrido, y las falencias de las organizaciones re-

volucionarias (incluido nuestro Partido), lo que permitió que se impusieran y arraigaran las concepciones reformistas y de conciliación de clases. Incluso por parte de nuevas organizaciones nacidas al calor de las estructuras sindicales existentes, como la CTA (Central de Trabajadores Argentinos).

Los años 90 significaron la reconfiguración del aparato productivo nacional, al mismo tiempo que se consolidó el dominio de los monopolios sobre el Estado, en un proceso de transnacionalización de la economía que ya no tuvo ni podía tener vuelta atrás. Sumado a un deterioro general de las condiciones de vida y de trabajo. Ello, en el plano político, significó también un nuevo carácter de la democracia burguesa.

La clase en el poder aprovecharía todo el terreno ganado en el control de las palancas estatales, lo que implicaría que los procesos electorales fueran vistos por amplios sectores de masas como una mera formalidad, determinando una drástica disminución de las expectativas de cambio a través de ese mecanismo, que llega hasta nuestros días.

El cuestionamiento a la concepción de la representatividad, y la crisis de la misma sería, en mayor o menor medida, una constante de los procesos políticos por venir que marcarían la historia política de nuestro país.

En diciembre de 1999 asume como presidente Fernando de la Rúa, al frente de una coalición denominada "Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación", llamada popularmente "la Alianza". Una unidad electoral entre la UCR y el FREPASO (partido nacido a mediados de los 90 fruto de la convergencia de sectores del PJ y otras agrupaciones menores del denominado progresismo).

Ya hacia finales del gobierno de Menem el Plan de Convertibilidad manifestaba su agotamiento.

La recesión, la creciente desocupación (que a octubre de 1999 ascendía al 14%), la marginalidad que aumentaba aceleradamente, el mantenimiento ficticio de la paridad entre el peso y el dólar, eran factores objetivos que hacían aumentar el descontento social y las luchas interburguesas entre los sectores que querían mantener dicho plan y los que apuntaban al quiebre del mismo. En 1998 entró en retroceso el ciclo expansivo del capital en el marco de la crisis mundial, luego de las crisis asiática y rusa de 1997/98, y la devaluación del real en Brasil a principios de 1999, lo que fue determinando la pérdida de competitividad de la economía argentina en el esquema en el que el peso seguía atado al dólar. En el medio se daba una creciente fuga de capitales hacia el exterior provocada por la necesidad de concentración del capital transnacional.

Las primeras medidas del nuevo gobierno fueron una

baja de las jubilaciones, pensiones y de la ayuda social, la implementación de nuevos impuestos como el impuesto a las ganancias sobre el salario y el aumento del IVA, la anulación de los subsidios de promoción industrial que afectaban a provincias como San Luis y Tierra del Fuego, y el impulso de leyes de flexibilización laboral. En síntesis: una continuidad de las políticas aplicadas por el menemismo con el fin de mantener a raya el déficit fiscal y el cumplimiento del pago de las deudas estatales y privadas mediante la expropiación a los sectores asalariados, en el marco de la crisis mundial arriba mencionada.

Sin temor a equivocarnos, dichas medidas significaron la mayor y más rápida pérdida de consenso de los gobiernos democráticos burgueses que se tenga memoria. A ello, hay que sumarle la creciente conflictividad social que ya venía en alza desde el gobierno anterior y a las que tales medidas actuaron como nafta sobre el fuego.

A pocos días de asumir De la Rúa se produjo el corte del puente que une las provincias de Corrientes y Chaco. Las demandas de los docentes de la primera por atrasos salariales contaron con la adhesión mayoritaria del pueblo, sirviendo de demostración de la temperatura que iba adquiriendo la lucha de clases. De nuevo, la manifestación popular se expresaba mediante la autoconvocatoria, lo que significaba que el conflicto no pudiera afrontarse dentro de los marcos institucionales de la democracia burguesa, como ya venía sucediendo en las luchas mencionadas durante el gobierno menemista.

Los hechos de Corrientes significaron que el nuevo gobierno, junto con las medidas antipopulares que intentó adoptar, naciera herido de muerte. La crisis política y económica se agudizó, pero ahora determinada principalmente por la lucha de masas que desembocaría en los sucesos de diciembre de 2001.

Las luchas ya no eran sólo de sectores asalariados estatales. Los llamados movimientos piqueteros (por los piquetes que se realizaban en las rutas en la época de Menem) habían ganado en organización estable. Algunos de ellos dependiendo de estructuras partidarias y otros intentando llevar adelante una construcción política desde las bases, manteniendo independencia de las estructuras orgánicas. También aparecieron nuevos sectores sindicales agrupados en el MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos) que, sin dejar de pertenecer a la CGT, con Moyano de Camioneros y Palacios de Transporte Automotor a la cabeza, expresaban un enfrentamiento más directo con las políticas del gobierno, al tiempo que reflejaban el peso que habían logrado los gremios de servicios en detrimento de los industriales a partir de las reformas económicas y productivas de los 90.

Para marzo de 2001 la crisis había fagocitado a dos ministros de economía, José Luis Machinea y Ricardo López Murphy (este último sólo duró dos semanas en el cargo).

En medio de una convulsión política y social creciente y de las pujas interburguesas que no dejaban de agudizarse, asume nuevamente como ministro de Economía Domingo Cavallo. El llamado “padre” de la convertibilidad volvía a puestos de gobierno con la misión de rescatar un plan que, como dijimos, ya estaba más que agotado.

Sin embargo, es necesario mencionar que por esos días algunos sectores medios de la sociedad no terminaban de asumir esa realidad y vieron con beneplácito la vuelta del ministro, que se proponía mantener la paridad entre el peso y el dólar que él mismo había iniciado.

Las diferencias entre las condiciones con las que asumió en 1991 y en 2001 eran profundas. Ahora asumía con una economía en llamas producto del peso cada vez más pesado de la deuda (que Machinea había aumentado en 40.000 millones de dólares mediante un “salvataje” acordado con el FMI denominado Blindaje), un creciente y descontrolado déficit fiscal, fuga de depósitos, exposición de la banca ante el Estado nacional y los Estados provinciales que crecía proporcionalmente a la posibilidad de una cesación de pagos. Las medidas de Cavallo fueron, nuevamente, apretar las clavijas de la economía con un plan de “déficit cero” en una desesperada búsqueda por sostener lo insostenible.

Nuevamente las condiciones internacionales hicieron lo suyo. En septiembre de 2001 se produjo el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, EEUU. La consecuencia inmediata de ese hecho fue la decisión de ese país de emprender guerras en diferentes regiones del planeta contra el “terrorismo internacional”. Nuevamente la oligarquía financiera mundial necesitaba profundizar la acción de aspirar capitales de todo el mundo y, por supuesto, Argentina no fue la excepción.

Las condiciones para el pago de las obligaciones por parte del FMI se endurecieron al punto de negar el envío de 1.200 millones de dólares que se habían comprometido en el marco del llamado blindaje, se cerró todo canal alternativo de financiamiento y las medidas que intentó el ministro sólo generaban más y más rechazo.

En noviembre de 2001, con Patricia Bullrich en el Ministerio de Trabajo, Cavallo impulsó el impuesto a las operaciones bancarias, un recorte del 13% a las jubilaciones y los salarios del área estatal y una nueva emisión de deuda, con el fin de controlar el déficit fiscal.

Las medidas generaron el repudio masivo de la sociedad, el aumento de la conflictividad y el mayor desprestigio del gobierno junto con la aceleración del retiro de los depósitos bancarios.



12 Si algo faltaba para que todo explotara por el aire fue la implementación del “Corralito”, por el que sólo se podían disponer de retiros bancarios de hasta \$ 250 por semana. La poca expectativa que podía subsistir en los sectores medios se vio dinamitada.

Campeaba una feroz recesión económica, por lo que la medida no hizo más que agravar la situación. Comenzó a converger la lucha de los sectores que ya venían siendo desplazados con la de los sectores medios. Cacerolazos, marchas masivas, demostraciones de descontento espontáneas se replicaban por todo el país. Las provincias comenzaron a emitir sus propias monedas ante la escasez de pesos, mientras la banca se llevaba los dólares de los ahorristas en aviones destinados a ese fin.

La semana previa al 19 de diciembre comenzaron a conocerse saqueos en distintos puntos del país. Ello fue generando un efecto contagio que sería imparable.

En la mañana del 19 de diciembre la situación estaba totalmente desbordada. Por la tarde de ese mismo día De la Rúa anuncia la implementación del Estado de Sitio. Por la noche, una masiva movilización hacia la Plaza de Mayo, con cortes de calles y avenidas en numerosos barrios de la ciudad de Buenos Aires y en varias localidades del resto del país, expresaba el repudio general a un gobierno terminado.

La consigna “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo” fue convertida en el grito de guerra del pueblo en las calles. El 20 de diciembre, luego de intensos combates callejeros contra las fuerzas de la represión en el centro porteño, Cavallo y De la Rúa renunciaron.

El alzamiento popular que culminó el 19 y 20 de diciembre fue el que hizo posible la derrota del gobierno y los planes del sector monopolista que aún lo sostenía.

Más de 30 muertos en todo el país fue la cuota de sangre del pueblo que debió ofrendarse.

Si bien fue un alzamiento sin una dirección política, el pueblo tenía claro que el objetivo era terminar con el gobierno y sus políticas. En ese sentido ninguna fuerza de la burguesía puede arrogarse lo que el pueblo conquistó en las calles. Pero la salida de la crisis no podía tener otra solución que la que tuvo. La clase dominante y sus fuerzas políticas debieron re-

troceder varios casilleros para reconstituir su institucionalidad.

Desde el aspecto del papel de las clases, **la clase obrera no fue partícipe como tal en esos sucesos**. Sumida todavía en la derrota y en las condiciones de retroceso que la misma marcaron (para esas épocas la desocupación rondaba el 28%), se vio impedida de actuar desde una política independiente.

Más todavía, las movilizaciones de esos días no contaron con la participación de contingentes obreros, sea a través de la espontaneidad como a través de las estructuras sindicales.

Este factor también fue determinante y sirve recordarlo para entender las condiciones en las que la burguesía monopolista pudo superar una crisis política de tamaño magnitud.

DEL KIRCHNERISMO AL MACRISMO

Luego de la renuncia de De la Rúa, el país tuvo cinco presidentes en poco más de una semana. Las profundas contradicciones de la burguesía monopolista, sumada a la presión de la población que venía de voltear a un gobierno, condicionaban la estabilidad política.

Como resultado de esas semanas asume la presidencia el Senador Eduardo Duhalde, caudillo de la provincia de Buenos Aires y dirigente del PJ nacional.

Sus primeros discursos y medidas apuntaron a calmar la situación. Realizó promesas que luego no fueron cumplidas como, por ejemplo la que se resume en la recordada y “célebre” frase: *“el que depositó dólares recibirá dólares”*. Se dispuso la salida de la convertibilidad con una devaluación del peso, la implementación de retenciones a las exportaciones y el congelamiento de tarifas.

La pesificación asimétrica determinó que miles de ahorristas vieran licuados sus depósitos en los bancos, lo que constituyó un monumental rescate de los mismos.

La conflictividad social no se apagó.

La salida del plan de Convertibilidad supuso inicialmente una baja del salario real, al tiempo que la recesión seguía campeando y los pesos no alcanzaban para cubrir las necesidades básicas de amplios sectores.

Las organizaciones sociales continuaron con sus protestas.

Principalmente las que no le dieron tregua al gobierno, como sí lo hicieron las comandadas por Luis D'Elía y Juan Carlos Alderete. En junio de 2002, una feroz represión a una manifestación en el Puente Pueyrredón de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, terminó con el saldo de dos muertos: Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Zona Sur, asesinados a sangre fría por la policía bonaerense.

Estos hechos determinaron el adelantamiento de las elecciones que proclamarían poco después a Néstor Kirchner.

Las medidas del nuevo gobierno estuvieron a tono con la época y los condicionantes del estado de ánimo y la movilización del pueblo. Definitivamente, estaban obligados a ejecutar medidas económicas que dieran respuestas a las demandas populares de más trabajo, mejores salarios y condiciones de vida.

Las medidas económicas tomadas por Duhalde comenzaron a hacer notar sus efectos ya a finales de 2002. Se puso en marcha la capacidad ociosa de la industria a partir de una política decididamente orientada a la exportación, lo que configuraría uno de los cambios sobresalientes de la estructura productiva del país.

Comenzó a crecer el empleo, se instauraron nuevamente las paritarias y, de a poco pero sostenidamente, la clase obrera pasó de sufrir la desocupación y sus efectos a un período en donde las ofertas de trabajo abundaban.

Aquí también las condiciones de la economía a nivel mundial jugaron su parte.

Un nuevo ciclo expansivo del capital, con China convertida en la locomotora del capitalismo, provocó un alza del precio de las materias primas que favoreció la política económica del kirchnerismo.



Puente Avellaneda - 2002

En el plano político, el nuevo presidente tuvo la habilidad de cooptar a las fuerzas del progresismo y “fundar” una corriente populista a tono con la existencia de gobiernos afines en la región, como el caso de Venezuela y Brasil.

La ola contraria a las políticas del Consenso de Washington era imparable, por lo que la burguesía monopolista debió reacomodar sus fichas en ese contexto. De allí que la utilización del populismo como estrategia para sostener el sistema capitalista y sus instituciones fue la herramienta con la que se levantó un muro de contención para que las masas no avanzaran a posiciones más revolucionarias. Todo era posible de cuestionar y cambiar, menos las relaciones de producción capitalistas.

La recomposición del aparato productivo dio un nuevo impulso a las luchas de los sectores asalariados del ámbito privado.

Entre 2004 y 2006 las huelgas del personal del subterráneo por la implementación de las 6 horas de trabajo, y la de telefónicos por aumentos salariales, marcaban un nuevo ritmo en la confrontación clasista.

Los gremios de servicios estatales y privados como camioneros y docentes también llevaban adelante sus reclamos.

Por esas épocas las estadísticas del Ministerio de Trabajo indicaban que los conflictos de origen sindical superaban ya los de los movimientos sociales.

Esta tendencia, con altas y bajas, se mantuvo durante todos esos años. Marcaba una lenta pero persistente recomposición de las fuerzas del trabajo luego de los años oscuros de los 90.

14 Es importante remarcar que la característica de esa etapa de conflictos laborales se desarrolló, casi unánimemente, encabezadas por estructuras sindicales, tanto peronistas como de la izquierda reformista. De esa manera, el populismo y el reformismo asumen la concepción de la representatividad de la democracia burguesa y la replican en todos los ámbitos de la lucha de clases. Gana terreno la conciliación de clases y se impide el salto político de la clase de vanguardia, cuyas luchas no exceden el marco económico.

Allí también se deben mencionar los déficits de las fuerzas revolucionarias. En el caso de nuestro Partido, recién por octubre de 2018 se consolidó un proceso autocrítico referido a nuestras falencias en el trabajo político y la construcción partidaria en el seno de la clase obrera, proceso que fue ratificado en nuestro 17° Congreso realizado en noviembre de 2019.

Volviendo a la etapa del gobierno kirchnerista, luego de la crisis capitalista de 2008, con la quiebra de Lehman Brothers y el estallido de la burbuja hipotecaria en EEUU, el proyecto económico de ese gobierno comienza a mostrar sus limitaciones.

El fin del ciclo expansivo del capital trajo aparejados sus efectos sobre la economía doméstica; aumento del déficit, de la inflación, bajo crecimiento de la economía, preanunciaban el agotamiento de ese ciclo económico, no así de la expectativa política que ese gobierno había despertado en amplios sectores de masas. En ese escenario las distintas facciones del capital fueron redefiniendo sus alianzas y apuestas políticas. Un sector importante de la burguesía monopolista, aun los que ha-

bían sido favorecidos con las políticas del kirchnerismo, comenzó a reagruparse detrás de la fuerza política encabezada por Mauricio Macri en unidad con la UCR y otros sectores menores. Allí se expresaba una parte del capital trasnacional en alianza con sectores medios reactivos al peronismo. Una oposición con características marcadamente ideológicas pero que, en su esencia, replicaba la reconfiguración de alianzas del capital a nivel mundial en el marco de la creciente disputa interimperialista encabezada por EEUU y China.

Se llega así al triunfo de Mauricio Macri sobre el peronista Daniel Scioli. El ajuste implementado mediante la liberación del tipo de cambio, el aumento de tarifas, las devaluaciones recurrentes que hicieron espiralizar el proceso inflacionario, la apertura de importaciones, la baja de retenciones, despidos en áreas estatales, significaron un nuevo traspaso de recursos de los sectores asalariados a favor de los monopolios.

La persistencia y alza de la inflación más la recesión económica determinaron un aumento del déficit fiscal que, en este caso, fue solventado nuevamente con deuda facilitando enormes ganancias a los fondos de inversión internacionales, desembocando en nuevo préstamo del FMI.

En diciembre de 2017 el gobierno macrista envía al Congreso Nacional el proyecto de ley de reforma jubilatoria. Una masiva manifestación obrera y popular expresó el rechazo a dicha ley. Característica saliente de esa movilización fue la participación activa de importantes contingentes obreros del Gran Buenos Aires y otras regiones del país, en una aparición de la clase de vanguardia en el conflicto social.



Congreso - Diciembre 2017

A partir de allí la lucha de la clase obrera desde sus lugares de trabajo fue creciendo paulatinamente, generalizándose una resistencia en la que el proletariado fue desarrollando luchas de distinta magnitud, incluso sobrepasando a las estructuras sindicales en muchas experiencias.

Luego de esas jornadas el PJ, con el kirchnerismo a la cabeza, lanzó la consigna “Hay 2019”, recreando una expectativa de recambio electoral y desmovilizando a importantes sectores de masas detrás de la misma.

TRIUNFO DE ALBERTO FERNÁNDEZ Y DEFRAUDACIÓN DE LA EXPECTATIVA POPULAR

En diciembre de 2019 asume nuevamente el peronismo con la fórmula Alberto Fernández – Cristina Kirchner. Un gobierno que llegó con la promesa de “volver mejores”. La mayor expectativa fue creada en torno a la derrota del macrismo y la ilusión de un cambio o una vuelta a la “etapa dorada” del kirchnerismo. Esas ilusiones fueron rápidamente desactivadas dado que la situación mundial del capitalismo atravesaba una crisis de súper producción desde mediados de 2018. Si a ello se le suma la aparición de la pandemia del COVID-19, en la que se afectó sensiblemente la producción y la logística en el planeta, las condiciones para la implementación de políticas como las de 2003 eran imposibles.

La pandemia y sus restricciones, que excluyeron a las actividades productivas declaradas como “esenciales”, determinaron que la clase obrera ratificara la etapa de resistencia que venía protagonizando hasta convertirse en el sector más dinámico de la lucha de clases. En ese período aumentó la conflictividad obrera y comenzó a ejercitarse la democracia obrera o democracia directa en muchas de las experiencias realizadas. El desprestigio de las estructuras sindicales alimentó ese camino, aun cuando todavía no se había logrado un nivel de organización estable con el que la clase obrera pueda desarrollar sus metodologías y ampliarlas a la lucha política contra su enemigo de clase.

Por ser de reciente actualidad no nos detendremos en un desarrollo de la experiencia del gobierno peronista de Fernández-Cristina Kirchner.

Sólo cabe mencionar que la misma 15 abonó el camino para seguir desprestigiando a las estructuras políticas burguesas, como así también a la democracia de esa clase. Que el principal terreno de lucha política se siga expresando en el marco de las elecciones se debe más a la debilidad de la clase obrera y su partido que a la fortaleza de la clase en el poder.

CONCLUSIONES

Las aspiraciones democráticas de las amplias masas, la defensa de las conquistas políticas logradas y la lucha por nuevas demandas **ha sido una constante en estos 40 años de historia política argentina.**

Volvemos a afirmar que todas esas conquistas fueron posibles por la lucha y la movilización obrera y popular; nada le debemos a la burguesía.

Las concesiones fueron obligadas -como siempre sucede- en la lucha de clases. No adherimos a ningún nombre propio que intente rescatar a una burguesía más buena que otra.

La burguesía es una sola, con sus contradicciones y sus disputas, que están basadas en ganar en la competencia capitalista y no en solucionar de fondo las necesidades de la sociedad.

El capitalismo muestra su fracaso ante ese cometido al haberse convertido en un régimen de explotación y opresión cada vez más anárquico y reaccionario.

La democracia burguesa ha demostrado y demuestra su carácter de clase, aquí y en el mundo. Es la forma que hoy adopta el régimen de dominación mediante el engaño y la represión, echando mano a todas las instituciones del Estado que están al servicio de los monopolios y del cual no se puede esperar más que mayor dominación y explotación.

La clase obrera y el pueblo argentinos, junto a sus organizaciones como nuestro Partido, hemos transitado y experimentado estas décadas aprendiendo en la práctica el significado y la esencia de esa forma de dominación.

Esa experiencia, aquí y en el mundo, marca que esa institucionalidad sufra una severa crisis, producto de los sucesivos desengaños que el movimiento de masas experimentó en estos años.



Dado el carácter clasista de la democracia burguesa, su crisis de representatividad, el rompimiento cada vez mayor de amplios sectores con la certeza de que por ese camino llegarán las soluciones de fondo, determinan que una táctica revolucionaria apunte a acelerar ese proceso de ruptura mediante una abierta e intransigente lucha política e ideológica contra sus concepciones; impulse el ejercicio de la democracia directa, en particular en el seno de la clase obrera, dado que la alternativa a la forma de dominación del régimen burgués debe nacer desde su oponente de clase fundamental.

Si bien las metodologías en las que reinan las concepciones de la representatividad burguesa comenzaron a ser cuestionadas en el seno de la base obrera, poniéndose a tono con lo que sucede en el resto de la sociedad, las dificultades para avanzar en una ruptura abierta con la democracia burguesa son importantes.

Allí juega, principalmente, la necesidad de que la clase de vanguardia eleve su nivel de conciencia de clase y de conciencia política, papel indispensable que deben cubrir las fuerzas revolucionarias.

La base material de la sociedad, en la que predomina una socialización de la producción inédita en la historia del modo de producción capitalista, choca de lleno con las formas representativas y de delegación del poder.

Allí radica el fundamento objetivo para sostener que es necesario e indispensable atacar desde todos los planos la democracia de los monopolios para hacer **avanzar y materializar las metodologías de la democracia obrera, la democracia directa, como forma de enfrentar a la clase en el poder.**

Democracia directa como ejercicio que resume toda la experiencia histórica de nuestra clase, en su estrecha relación con el concepto de poder local (aquel que nos legara nuestro Secretario General Histórico Mario Roberto Santucho); en donde no sólo dejamos de delegar en “otros” nuestras decisiones porque asumimos que somos los protagonistas de nuestro destino, sino que lo hacemos desde una verdadera organización desde las bases, en donde se corre el velo de cualquier tipo de unidad por arriba para que comience a pesar una verdadera unidad por abajo que represente nuestros intereses de clase.

Por eso, la intervención política de la clase de vanguardia debe plantearse desde esa premisa, la única que puede mostrar un camino verdadero de cambio y de nuevo orden social, materializando la unidad con el resto de las clases explotadas y oprimidas desde un programa de acción política independiente de cualquier variante que intente sostener a la democracia burguesa, que es lo mismo que sostener el sistema de explotación y opresión capitalista. ★

Las aspiraciones democráticas de las amplias masas,
la defensa de las conquistas políticas logradas
y la lucha por nuevas demandas
ha sido una constante en estos 40 años
de historia política argentina.